

## REPÚBLICA DE COLOMBIA



### SALA DE DECISIÓN LABORAL

El veintitrés (23) de febrero de dos mil veintitrés (2023), la SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL del TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, procede a proferir sentencia de segunda instancia, en el presente proceso ordinario laboral promovido por la señora **GLORIA LUCIA MOLINA DÍAZ** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES** (en adelante COLPENSIONES), la sociedad **COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS** (en adelante COLFONDOS S.A.) y la sociedad **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.** (en adelante PORVENIR S.A.) tramitado bajo el radicado No. 05001-31-05-002-2018-00844-01.

El Magistrado del conocimiento, Dr. FRANCISCO ARANGO TORRES, declaró abierto el acto y previa deliberación sobre el asunto, la Sala adoptó el proyecto presentado por el ponente, el cual quedó concebido en los siguientes términos:

#### 1. ANTECEDENTES:

La demandante pretende con la presente acción judicial, que se declare la nulidad de su traslado al régimen pensional de ahorro individual con solidaridad (en adelante RAIS), ordenando su retorno al régimen pensional de prima media con prestación definida (en adelante RPM) administrado por Colpensiones.

**Como fundamento fáctico de sus pretensiones** relata la actora que nació el 26 de junio de 1958, por lo que para el 1° de abril de 1994 contaba con más de 35 años de edad, por lo que es beneficiaria del régimen de transición.

Indica que inició sus cotizaciones en el sistema general de pensiones en el RPM el 9 de junio de 1980, y posteriormente se trasladó al RAIS a través de la AFP PORVENIR S.A. en octubre de 1994.

Manifiesta que no obstante a lo anterior, este traslado es completamente nulo y/o ineficaz, puesto que no existe formulario de afiliación suscrito por ella.

Expone que PORVENIR S.A. no le advirtió que perdería derechos adquiridos como el de transición, sino que le aseguró que si se afiliaba a dicho fondo obtendría mayores y mejores beneficios de los que venía disfrutando en el ISS, como por ejemplo, que se podía pensionar antes de la edad requerida, pero no se le advirtió que para ello requería un capital acumulado, ni que si quería disfrutar de una pensión anticipada, le aplicarían un porcentaje de descuento a la fecha de la solicitud, además no le expuso las ventajas y desventajas de pertenecer al RAIS en su situación particular, por lo que en ningún caso le hicieron a la demandante advertencia sobre los riesgos que se generaban por trasladarse al RAIS, ni explicaron que era un fondo de pensiones, ni que la pensión podía ser inferior al RPM.

Indica que retornó nuevamente a COLPENSIONES el 26 de julio de 2010, entidad que finalmente en el año 2017 le otorgó la pensión de vejez mediante la resolución GNR 32305, pero negándole los beneficios del régimen de transición del Art. 36 de la ley 100 de 1993.

## **2. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA:**

El *a quo* accedió a las pretensiones de la demanda, declarando la ineficacia del traslado de la demandante al RAIS y condenando en consecuencia a las AFP COLFONDOS S.A. y PORVENIR S.A. a trasladar a COLPENSIONES, las comisiones de administración, las cuotas de seguros previsionales y los aportes al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, durante todo el tiempo que estuvo afiliada la demandante a estas AFP, ordenando además a COLPENSIONES recibir todos los dineros y tener la afiliación de la demandante al RPM sin solución de continuidad.

Para fulminar condena en lo que tiene que ver con la ineficacia de traslado, El *a quo* consideró que la corte Suprema de Justicia tiene fijada una línea jurisprudencial sobre el tema de la afiliación a un régimen pensional y se sintetiza en la obligación de brindar una información completa, suficiente, idónea y comprensible sobre las características de los regímenes pensionales, determinando e informando la conveniencia e inconvenientes de uno y otro régimen, y la inversión de la carga de la prueba de la información brindada en cabeza de la AFP.

Luego, señaló que en el proceso no se probó por parte de PORVENIR S.A. que, al momento de la afiliación de la demandante, haya cumplido con el deber legal de otorgar una explicación integral sobre la regulación de los regímenes pensionales, las ventajas y desventajas, resultando insuficiente como prueba de la existencia de un consentimiento suficientemente informado la suscripción del formulario de afiliación pre impreso.

Finalmente declaró no probadas las excepciones de mérito y condenó en costas a PORVENIR S.A. y absolvió de las mismas a COLPENSIONES y COLFONDOS S.A.

### **3. DEL RECURSO DE APELACIÓN:**

La sentencia fue apelada por la apoderada judicial de PORVENIR S.A., argumentando que la afiliación realizada por la demandante cumplió con todos los requisitos para nacer a la vida jurídica, pues el formulario de afiliación fue firmado después de la debida asesoría y con ello se dio su consentimiento para que el traslado fuera eficaz.

Expone que actualmente la demandante no se encuentra afiliada a PORVENIR S.A., puesto que decidió trasladarse a COLFONDOS S.A. por lo que PORVENIR S.A. ya le traslado a COLFONDOS todos los aportes de la cuenta de ahorro individual de la demandante.

Manifiesta que en caso de que el Tribunal decida confirmar la decisión en lo relativo a la declaratoria de la ineficacia, solicita se revoque la decisión de devolver lo referente a las cuotas de administración teniendo en cuenta que el artículo 20 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 7 de la Ley 797 del 2003, establece que tanto en el RAIS como en el RPM un 3% del monto del IBC se distribuirá para el pago de las cuotas de administración y la financiación de la pensión de invalidez y sobrevivencia, lo que quiere decir que si la demandante se encontrara afiliada en el RPM, también se hubieran realizados los descuentos con los mismos efectos por lo que no se genera una falta de equivalencia en los aportes, al contrario se estaría generando un enriquecimiento sin justa causa a favor de COLPENSIONES, entidad que no administro los aportes de la demandante durante su tiempo de afiliación a PORVENIR S.A.

### **4. DE LOS ALEGATOS EN ESTA INSTANCIA:**

Corrido el traslado para alegar en esta instancia, los apoderados de PORVENIR S.A. y de COLPENSIONES allegaron escrito de alegaciones, en los que señalaron resumidamente lo siguiente:

### **ALEGATOS DE PORVENIR S.A.**

No obra dentro del proceso ninguna prueba que respalde en forma fehaciente y concluyente la afirmación de la parte actora en el sentido de que se le omitió información en el momento de tomar la determinación de efectuar el traslado y más aún, teniendo en cuenta que obra prueba documental, esto es, formulario de vinculación a mi representada, en el cual la señora MOLINA DÍAZ suscribió de su puño y letra que tomaba su decisión de traslado en forma autónoma y con el pleno conocimiento.

El acto jurídico suscrito por las partes en el momento de diligenciar la vinculación a la AFP de PORVENIR S.A. goza de plena validez y fue producto de la voluntad de ambos contratantes, por lo que no es procedente bajo argumentos que carecen de sustento probatorio, invalidar la manifestación de la voluntad plasmada en el documento de la afiliación el cual es auténtico y goza de plena validez, toda vez que no fue redargüido de falso.

Solicito de manera respetuosa a los Señores Magistrados en caso de que no se modifique la decisión de primera instancia en cuanto a la declaratoria de ineficacia se estudie lo relativo a los conceptos a trasladar por parte de mi representada a Colpensiones, ello teniendo en cuenta que, el Art. 20 de la ley 100 de 1993 modificado por el 7 de la ley 797 de 2003 establece que tanto en RPM como en RAIS un 3% del monto del IBC se distribuirá para el pago de las cuotas de administración y la financiación de la pensión de Invalidez y sobrevivencia, lo que quiere decir que si la demandante se hubiese encontrado afiliada sin solución de continuidad al RPM administrado hoy por Colpensiones, también en dicho régimen se hubiera generado el descuento del mismo porcentaje y para los mismos efectos, razón por la que, en este caso, no se puede entender, que las cuotas de administración se emplean como dineros que ayudan a la financiación de la pensión de vejez, pues las mismas se descuentan como retribución a la gestión de administración que realiza la administradora, y teniendo en cuenta que Colpensiones no fue quien administró los aportes de la señora demandante durante el tiempo de su afiliación al RAIS, no existe razón jurídica para que se le deban adjudicar tales conceptos a dicha administradora, máxime si se tiene en cuenta que Porvenir S.A. reintegrará a la misma los rendimientos

financieros que generó la juiciosa administración de los recursos de la señora demandante.

### **ALEGATOS DE COLPENSIONES.**

Sea lo primero reiterar nuevamente lo referente a la imposibilidad de traslado de régimen impuesta por el legislador en el artículo 2 de la ley 797 de 2003 el cual modificó el literal E del artículo 13 de la ley 100 de 1993, a través del cual se estableció claramente que el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren menos de 10 años para adquirir su pensión de vejez, supuesto jurídico en el cual nos debemos basar en el caso en concreto toda vez que de la prueba que reposa en el expediente, se observa que el demandante, ya se encontraba en la prohibición inmersa referida con anterioridad y por ende se imposibilitaba el traslado de régimen como aconteció en el presente asunto.

Ahora bien, la parte débil en el caso sub examine debe ser considerada como quien carece de capacidades para ilustrarse y asesorarse de la menor manera y no como una persona per se vulnerable que está imposibilitada de tener un entendimiento mínimo del sistema, incapaz de realizar actividades orientadas a instruirse mejor e incompetente para aportar pruebas que expongan la existencia de un vicio en el consentimiento. La corte Constitucional en tal sentido (sentencia T 422 de 2011) indicó que en materia de traslado la libertad de escoger el régimen pensional debe verse menguada o adolecer de algún vicio en el consentimiento, y Solamente cuando los hechos de la controversia permitan dilucidar que la persona era una parte débil debido a su calidad y escasos conocimientos puede procederse con un regreso automático. Así pues, dicha providencia amparó los derechos de un ciudadano campesino analfabeta:

“Teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos objeto de esta controversia, la afirmación del actor resulta creíble; en efecto, que los aportes objeto del traslado fueran posteriormente devueltos por parte de Skandia al ISS, sin conocimiento ni autorización del actor, es un hecho que no contrasta con el hallazgo de esta Sala, consistente en considerar que para el afiliado era muy difícil comprender las implicaciones del documento que firmaba, “Afiliación Fondo de Pensiones Obligatorias”, debido a sus bajos conocimientos educativos y al nivel de pensamiento concreto a que se refirió el diagnóstico psicológico.

Con fundamento en lo anterior agrega la Corte que en ese caso específico no será necesario examinar si se presentó un vicio del consentimiento o al menos fuerza con capacidad de viciarlo:

Por considerar suficiente la razón anterior, la Sala no encuentra necesario dilucidar si al momento de firmar el formulario de afiliación con la AFP Skandia al régimen de ahorro individual con solidaridad, se presentó algún vicio del consentimiento o al menos fuerza moral que haya podido viciarlo; lo anterior se afirma por la sensación que puede tener un campesino sin mayor preparación académica, al momento de celebrar un contrato de trabajo, de lo que podría ocurrir si no llegara a firmar la documentación que le presentan y por la ausencia de espontaneidad en la suscripción del formulario.

La Corte indica la necesidad probatoria de establecer la existencia de un vicio, fuerza o dolo al momento de trasladar a un afiliado, de inclusive analizar la calidad del demandante y de analizar cada caso particular según los hechos y circunstancias. Sin embargo y como se dijo en precedencia, son beneficios en los que los afiliados vieron una oportunidad mayor en este régimen pensional, por lo que no puede hablarse de un vicio en el consentimiento en los términos del artículo 1510 del Código Civil.

Vicio del consentimiento que no quedó demostrado en el presente asunto, pues si analizamos de manera pormenorizado el interrogatorio de parte efectuado al demandante, con sus efectos legales de confesión, aquel indicó en su declaración que la firma del formulario de afiliación a la AFP fue de manera voluntaria y no hubo presiones por parte de un tercero ni por el asesor del referido fondo.

Por tal motivo señores magistrados solicitó de manera respetuosa, se revoque la sentencia emitida por el juzgado 02 Laboral del Circuito de Medellín.

## **5. PROBLEMA JURÍDICO PARA RESOLVER:**

El problema jurídico para resolver se circunscribe a establecer si la afiliación del demandante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad es ineficaz y de serlo, en qué términos y condiciones se debe realizar el traslado a COLPENSIONES del importe de las cotizaciones efectuadas en el RAIS por el demandante.

Tramitado el proceso en legal forma y por ser competente esta Corporación Judicial para conocer de la APELACIÓN y de la CONSULTA de la sentencia, conforme a lo

dispuesto en los artículos 10 y 14 de la Ley 1149 de 2007, se pasa a resolver, previas las siguientes,

## 6. CONSIDERACIONES:

De conformidad con lo dispuesto el art. 14 de la Ley 1149 de 2007 además de resolverse la apelación de PORVENIR S.A., se consultará la sentencia en favor de COLPENSIONES por haberle resultado adversa, por lo que, la legalidad del fallo será estudiada en su integridad.

Primeramente, es necesario manifestar que el traslado o afiliación a los distintos regímenes pensionales la establece el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, disponiéndose además en los Arts. 60 y 114 de esta ley, como en los arts. 10, 12 y 15 del Decreto 720 de 1994 vigente para la época del traslado del demandante, que el traslado de régimen pensional debe partir de la cabal y completa asesoría que lleve a un asegurado a tomar una decisión responsable e informada, asesoría que ha de entenderse pedagógica, es decir, realmente entendible para cada persona conforme a su grado de cultura y su situación particular, pues los casos no presentan las mismas características o condiciones.

La jurisprudencia de la SCL de la Corte Suprema de Justicia, a partir de la sentencia SL12136-2014 del 03 de septiembre de 2014, abandonando el concepto de **nulidad** del traslado, precisó que la omisión en la debida asesoría de las AFP al momento del referido traslado lo convierte en **ineficaz**, por violentar la exigencia del literal b) del artículo 13 de Ley 100 de 1993, sobre la obligatoriedad de que tal manifestación de traslado fuera libre y voluntaria y contempló, que de no ser así, la afiliación respectiva quedaría sin efecto y podría realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.

Tal posición, que constituye a la fecha la línea jurisprudencial de la SCL de la Corte Suprema de Justicia sobre dicho tema, ha sido ratificada de manera reiterada en todos los pronunciamientos emanados de dicha corporación, como en las sentencias SL1688-2019 y SL1689-2019, ambas proferidas el 8 de mayo de 2019, en las que, además la Corte fijó unas conclusiones jurisprudenciales en torno al tema de la ineficacia o nulidad de traslado de régimen, las que se resumen de la siguiente manera:

1. Las AFP, desde su creación, tenían el deber de brindar información a los afiliados o usuarios del sistema pensional a fin de que estos pudiesen adoptar una decisión consciente y realmente libre sobre su futuro pensional. primeramente, con un deber

de información necesaria (en vigencia del decreto 663 de 1993), luego de asesoría y buen consejo (en vigencia de la Ley 1328 de 2009 y el decreto 2241 de 2010), y finalmente de doble asesoría (en vigencia de la Ley 1748 de 2014 y el decreto 2071 de 2015)

2. La simple constancia del consentimiento informado vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente para dar por demostrado el deber de información. A lo sumo, acredita un consentimiento, pero no que haya sido informado.
3. La carga de la prueba de demostrar que el afiliado recibió la información debida, veraz y suficiente cuando se afilió, le corresponde a la AFP.
4. El precedente de la CSJ en torno a la ineficacia del traslado no aplica sólo a los casos en que el afiliado se cambia de régimen pensional a pesar de tener consolidado un derecho pensional, o contar con una expectativa pensional o derecho a la transición del art. 36 de la ley 100 de 1993, sino en todos los casos de incumplimiento del deber de información.

En el presente asunto, está probado, que la accionante, estando afiliada al régimen pensional de prima media administrado por el ISS, hoy COLPENSIONES, según historia laboral que reposa a folios 29 a 37 del expediente (Documento 01 del expediente digital), se afilió a la administradora del RAIS PORVENIR S.A. el 10 de octubre de 1994, con efectividad al 1 de noviembre de la misma anualidad como se indica en el certificado SIAFP que milita a folio 223 del expediente. Posteriormente se trasladó a COLFONDOS S.A. el 24 de febrero de 2009, con efectividad al 1° de abril de la misma anualidad como se anota en el certificado SIAFP que milita a folio 223 del plenario, retornando nuevamente a COLPENSIONES el 26 de julio de 2010, como se anota en el certificado SIAFP obrante a folio 223, entidad que finalmente en el año 2017 le otorgó la pensión de vejez a la actora como se advierte en la resolución GNR 32305 visible a folio 80 a 85 del expediente digital.

De otra parte, de acuerdo a la copia de la cedula de ciudadanía de la demandante que milita a folio 142 del documento 01 del expediente digital y en armonía a su historia laboral de folios 29 a 37, para el día 1° de abril de 1994 contaba con 35 años de edad, dado que nació el 26 de junio de 1958 y por tanto ostentaba la condición de beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la citada Ley 100 de 1993, situación que no se advierte que le haya sido puesta en conocimiento por parte de la AFP PORVENIR S.A. en el año 1994, siendo un aspecto relevante en su caso, dado que el traslado al RAIS implicaba la pérdida del beneficio transicional, que le otorgaba



ventajas para obtener la pensión de vejez, en cuanto edad, densidad de semanas cotizadas y tasa de reemplazo.

Sobre el deber de información antes citado, en el interrogatorio de parte que fue absuelto por la demandante, el cual se encuentra grabado a partir del minuto 00:15:45 del video de la audiencia de conciliación, trámite y juzgamiento (documento 12 del expediente digital), no confiesa que la AFP PORVENIR S.A. le hubiere brindado toda la información, completa, clara y oportuna que se requería para materializar su afiliación al RAIS, pues no manifiesta que se le haya ilustrado sobre aspectos neurálgicos de los regímenes pensionales, como lo son las características de uno y otro régimen pensional, los requisitos para acceder a las prestaciones económicas en cada uno de ellos, la forma de liquidación de la mesada pensional en cada régimen, entre otros aspectos que resultan necesarios para considerarse que se otorgó una información completa, comprensible y suficiente.

Se pone de presente que el hecho que la demandante haya regresado al RPM de COLPENSIONES y haya obtenido la pensión de vejez, no es óbice para que se declare la ineficacia de traslado que efectuó la RAIS, como lo indicó La Sala de Casación Laboral de la CSJ, en Sentencia SL- 5280-2021, Radicación 85801 del 3 de noviembre de 2021. En el mismo sentido se pronunció la CSJ en la sentencia SL2159-2022, Radicación n.º67556 del 11 de 2022.

De otra parte, en lo referente a las **sumas que deben ser devueltas** a COLPENSIONES, encuentra la Sala que, la orden impartida por la *a quo*, no se encuentra del todo acorde con la línea jurisprudencial trazada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en dicha materia, y por tal razón debe ser CONFIRMADA y ADICIONADA, en el sentido de indicar que la devolución que debe realizar PORVENIR S.A. y COLFONDOS S.A. a COLPENSIONES deberá incluir el valor de los gastos de administración y comisiones, además de los porcentajes que en su momento fueron descontados por dichas AFP de las cotizaciones del demandante y que fueron destinados a pago de primas de seguros previsionales, pago de prima de reaseguro de Fogafín y Fondo de Garantía de Pensión Mínima sin descuento de ninguna índole, pues contrario a lo argumentado por la apoderada de PORVENIR S.A. en su recurso de alzada, al declararse la ineficacia del acto de traslado, **ningún efecto jurídico puede derivarse de este**, como lo ha señalado de manera reiterada la SCL de la CSJ en sentencias CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018 y CSJ SL1421-2019.

Ha explicado la Corte Suprema de Justicia que las consecuencias prácticas de la ineficacia son idénticas a las de la nulidad, señalando la Sala Civil de la alta Corporación que: *«cualquiera sea la forma en que se haya declarado la ineficacia jurídica (entendida en su acepción general), bien porque falte uno de sus requisitos estructurales, o porque adolezca de defectos o vicios que lo invalidan, o porque una disposición legal específica prevea una circunstancia que lo vuelva ineficaz, la consecuencia jurídica siempre es la misma: declarar que el negocio jurídico no se ha celebrado jamás»* (CSJ SC3201-2018).

En este orden de ideas, como lo dispone el art. 1746 del C.C., norma que regula las restituciones mutuas en el régimen de nulidades: *“La nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada, da a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo”*.

En este sentido se pronunció igualmente la SCL de la CSJ, sentencia 31989 de 8 de septiembre de 2008 y lo reiteró en sentencias SL4964-2018, SL4989-2018, SL1421-2019 y SL1688-2019, en la que precisó:

*“La administradora tiene el deber de devolver al sistema todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación del actor, como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, con todos sus frutos e intereses como los dispone el artículo 1746 del C.C., esto es, con los rendimientos que se hubieren causado.*

*“Como la nulidad fue conducta indebida de la administradora ésta debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, ya por pago de mesadas pensionales en el sistema de ahorro individual, ora por los gastos de administración en que hubiere incurrido, los cuales serán asumidos por la Administradora a cargo de su propio patrimonio, siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C.*

*“Las consecuencias de la nulidad no pueden ser extendidos a terceros, en este caso, a la administradora del régimen de prima media en el que se hallaba el actor antes de producirse la vinculación cuya nulidad se declara, de modo que no debe asumir por el sistema de pensiones sanciones derivadas de la mora en el pago íntegro del derecho pensional, obligaciones por las que sólo ha de responder a partir de cuando le sean trasladados los recursos para financiar la deuda pensional por parte de la entidad aquí demandada.”*

Teniendo en cuenta lo anterior, al tratarse de la declaratoria de un acto ineficaz que acarrea los mismos efectos de uno nulo, no es dable concebir, so pretexto del principio de la buena fe o de una buena gestión en la administración del bien, que dichas sumas queden por fuera de las restituciones, de un lado, porque se trata de rubros que pertenecen al régimen de prima media con prestación definida, y por ello son

necesarios para su funcionamiento, y por otro, porque es la indebida actuación por parte de la AFP demandada, al no proveer la información clara, completa y comprensible a través de sus asesores, que tiene como consecuencia, además del hecho de generar la declaratoria de ineficacia, que deban asumir de su patrimonio los perjuicios que se ocasionen a los afiliados y las sumas sufragadas a terceros, como lo son las aseguradoras previsionales, ello con base en los artículos 2.2.7.4.1 y 2.2.7.4.3 del Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016, que compiló los artículos 10 y 12 del Decreto 720 de 1994.

En cuanto a la excepción de PRESCRIPCIÓN formulada por las demandadas al dar respuesta a la demanda, se tiene que, bajo la óptica jurisprudencial de la ineficacia del traslado de régimen introducido por la SCL de la CSJ, al concluirse que el acto jurídico de traslado de régimen nunca nació a la vida jurídica, no es procedente aplicar la prescripción, conforme puntualmente lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia SL1689-2019, proferida el 8 de mayo de 2019.

Conforme a las razones fácticas, probatorias y de derecho expuestas en precedencia, la sentencia apelada y consultada será CONFIRMADA y ADICIONADA en los términos anteriormente expuestos.

COSTAS en esta instancia a cargo de PORVENIR S.A. por haber sido vencida en el recurso de apelación. Las agencias en derecho, conforme al Nral. 3 del Artículo 366 del CGP, las estima el ponente en la suma de \$1.160.000.

## 7. DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

### RESUELVE:

**PRIMERO: CONFIRMAR** la sentencia del 8 de octubre de 2021 proferida por el JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, en el proceso ordinario laboral promovido por el señor **GLORIA LUCIA MOLINA DÍAZ** contra **COLPENSIONES, COLFONDOS S.A. y PORVENIR S.A. ADICIONÁNDOLA** en el sentido de **DECLARAR** que la devolución que debe realizar PORVENIR S.A. Y COLFONDOS S.A. a COLPENSIONES, son los gastos o cuotas de administración incluido el porcentaje de los seguros previsionales, reaseguro de Fogafín, y fondo de

garantía de pensión mínima, es decir el porcentaje del 100% de la cotización que no fue abonado en la cuenta de ahorro pensional de la actora, durante el tiempo que estuvo afiliada a estos Fondos de Pensiones.

**SEGUNDO: COSTAS** en esta instancia a cargo de PORVENIR S.A. como agencias en derecho se fija la suma de \$1.160.000.

La anterior sentencia se notifica a las partes en **EDICTO**.

Oportunamente devuélvase el expediente al Juzgado de origen.

No siendo otro el objeto de esta diligencia se declara culminada, y se firma por quienes en ella han intervenido, los magistrados,

Firmado Por:

Francisco Arango Torres  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **713b2965fcdc8c0a30b671d81ab33437bf2498faed993fcdf4095f75a9a7c4d0**

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**